



Revista de Estudios de Género. La ventana

ISSN: 1405-9436

ISSN: 2448-7724

revista\_la ventana.cucsh@administrativos.udg.mx

Universidad de Guadalajara

México

Fabian Martinez, Elkin

**Participación social y derechos políticos de las mujeres indígenas  
en el marco de las Guerras del Agua y del Gas en Bolivia (2000-2003)**

Revista de Estudios de Género. La ventana, vol. VII, núm. 61, 2025, Enero-Junio, pp. 308-348

Universidad de Guadalajara

Guadalajara, México

DOI: <https://doi.org/10.32870/lv.v7i61.7863>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88480828011>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc

Red de revistas científicas de Acceso Abierto diamante

Infraestructura abierta no comercial propiedad de la academia

**Participación social y derechos políticos de las mujeres indígenas en el marco de las Guerras del Agua y del Gas en Bolivia (2000-2003)**

**Social participation and political rights of indigenous women in the context of the Water and Gas Wars in Bolivia (2000-2003)**

Elkin Fabian Martinez<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad Nacional Autónoma de México, México.  
Correo electrónico: redfabuis@gmail.com

**Resumen:**

El siglo XX se erige como un período crucial en la historia de América Latina, particularmente en Bolivia, donde diversos cambios y procesos sociales alteraron profundamente la concepción de la política, la democracia y el poder. Este artículo se centra en la participación de las mujeres indígenas y campesinas en los movimientos sociales en Bolivia, con un enfoque particular en las Guerras del Agua y del Gas en 2000 y 2003. El objetivo es visibilizar la contribución de estas mujeres a las luchas sociales y políticas, a menudo ignorada en la historia oficial. La problemática radica en la persistente invisibilización de las mujeres en estos movimientos, a pesar de su participación activa y crucial. Además, se

DOI: <https://doi.org/10.32870/lv.v7i61.7863>

REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, LA VENTANA, NÚM. 61, ENERO/JUNIO 2025, PP. 308-348 ISSN 1405-9436/EISSN 2448-7724

aborda la persistencia de las desigualdades de género y la dominación patriarcal en Bolivia, que limitan la participación política de las mujeres y perpetúan la discriminación y violencia de género. Esta reflexión se basa en teorías feministas y de género para analizar la participación de las mujeres en los movimientos sociales y las formas de dominación patriarcal en el caso boliviano. También se utilizan teorías de los movimientos sociales para entender el surgimiento y desarrollo de estos movimientos en respuesta a las políticas neoliberales y la privatización de los recursos naturales. La metodología utilizada incluye el análisis de documentos históricos, registros de protestas y movilizaciones, y estudios teóricos previos sobre los movimientos sociales en Bolivia; es decir, es de carácter documental. Las conclusiones destacan la importancia de reconocer y valorar la participación de las mujeres en los movimientos sociales en Bolivia. A pesar de la discriminación y la violencia de género, las mujeres han sido activas en las luchas por sus derechos y contra la opresión. Así, se subraya la necesidad de desafiar las estructuras patriarcales y garantizar su plena participación y emancipación.

*Palabras clave:* Bolivia, neoliberalismo, mujeres campesinas, mujeres indígenas, movimientos sociales, guerra del agua, guerra del gas

**Abstract:**

The 20th century stands out as a pivotal period in the history of Latin America, particularly in Bolivia, where various social changes and

processes deeply reshaped the conception of politics, democracy, and power. This article focuses on the participation of indigenous and peasant women in social movements in Bolivia, with a particular emphasis on the Water and Gas Wars in 2000 and 2003. The objective is to highlight the contribution of these women to social and political struggles, often overlooked in official history. The issue lies in the persistent invisibility of women in these movements, despite their active and crucial involvement. Additionally, it addresses the persistence of gender inequalities and patriarchal domination in Bolivia, which limits women's political participation and perpetuates gender discrimination and violence. This reflection is grounded in feminist and gender theories to analyze women's participation in social movements and forms of patriarchal domination in the Bolivian context. It also utilizes social movement theories to understand the emergence and development of these movements in response to neoliberal policies and the privatization of natural resources. The methodology employed involves the analysis of historical documents, records of protests and mobilizations, and previous theoretical studies on social movements in Bolivia; in other words, it is a documentary analysis. The conclusions emphasize the importance of recognizing and valuing women's participation in social movements in Bolivia. Despite gender discrimination and violence, women have been active in the fight for their rights and against oppression. Thus, it underscores the need to challenge patriarchal structures and ensure their full participation and emancipation.

*Keywords:* Bolivia, neoliberalism, indigenous women, peasant woman, social movements, water war, gas war

RECEPCIÓN: 3 DE NOVIEMBRE DE 2023/ACEPTACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2024

## Introducción

En Bolivia, las luchas, protestas y manifestaciones sociales impulsadas por diversas organizaciones y movimientos de los años 90 e inicios del 2000 fueron consecuencia de una serie de problemas políticos, económicos y ambientales, gestados en gran medida por los efectos del capitalismo y el neoliberalismo, aterrizados en la década de los 80 en este territorio; pero también de la colonialidad que, como proyecto occidental, perpetuó en América Latina jerarquías de desigualdad y exclusión social, entre otros. Como menciona Melucci (1986), un movimiento social se puede entender como un conjunto de acciones colectivas que buscan transformar la realidad social existente. Estas acciones colectivas suelen surgir en respuesta a tensiones, desequilibrios, diferencias entre expectativas y realizaciones, así como cambios en la estructura social. En cada uno de estos episodios participaron cientos de mujeres campesinas e indígenas en defensa de sus territorios y sus derechos, demandando cambios en las estructuras políticas y sociales de este país. Tanaka

(2001), define la participación social como el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, pero también menciona que hay muchos tipos de participación, como el involucramiento de los ciudadanos en los sectores populares que buscan implementar políticas sociales a través de organizaciones y movimientos desde la acción colectiva.

La década de los 90 marca varias movilizaciones populares contra las políticas estadounidenses de erradicación del cultivo de hoja de coca y la lucha contra el narcotráfico, protagonizadas por campesinos y mujeres indígenas cocaleras. Durante estos episodios, las mujeres indígenas demostraron ampliamente su capacidad de protesta y lucha por los derechos humanos. “El 18 de diciembre de 1995, las mujeres cocaleras del Chapare iniciaron una marcha hacia La Paz, sede del gobierno boliviano. Sería el inicio de una confrontación permanente para demandar justicia y derechos” (Lux de Coti, 2019, p. 25). Durante la guerra del agua y del gas, la participación social de las mujeres indígenas y campesinas fue contundente, pero ampliamente invisibilizada en la construcción histórica de este país; en Bolivia, es escasa la literatura sobre los aportes de las mujeres en estas movilizaciones sociales. Lo que aparece generalmente en los registros históricos son categorías como el pueblo, las comunidades, los campesinos, etcétera. Se invisibiliza el trabajo y la lucha social de las mujeres en casi todos estos procesos sociales, marcando la memoria histórica desde la dominación patriarcal como sistema que oprime e invisibiliza a las mujeres cotidianamente. Visibilizar su participación en los momentos de insurrección que

marcan profundamente las estructuras de la sociedad son actos significativos para luchar contra las normas y valores que perpetúan la desigualdad y la violencia. Y no se trata de una reflexión menor, porque justamente ha sido de esa forma que el trabajo de cientos de mujeres ha quedado invisibilizado y rezagado en la historia de los procesos políticos y sociales de numerosas regiones.

En este contexto histórico, el tema de la igualdad y los derechos de las mujeres indígenas en Bolivia era complejo y formaba parte de las luchas de numerosas mujeres trabajadoras y campesinas en situaciones de violencia y conflictos sociales a lo largo de los años. Factores interrelacionados como la etnicidad y el género, las desigualdades históricas, las reformas estructurales arraigadas al neoliberalismo, la violencia doméstica y comunitaria, la poca integración de las demandas de las mujeres indígenas en el movimiento feminista boliviano, entre otros, contribuían a la invisibilización de los derechos y demandas de las mujeres indígenas. Y es que, en el marco latinoamericano de las organizaciones y movimientos sociales que mayor incidencia han tenido en los cambios políticos, como da cuenta Santos (2007), las comunidades indígenas de Bolivia son pioneras por la forma de organizarse y manifestarse para generar cambios políticos e institucionales en la región. Esta peculiaridad puede deberse a que “Bolivia es un país marcado por la gelatinosidad de sus estructuras institucionales y por la marginalidad en el contexto internacional, pero donde, quizá por ello, ciertas cosas tienden a suceder antes que en otros lugares” (García Linera, 2009, p. 347). Lo que ocurrió, en términos de movilización social

durante las guerras del agua y del gas, fue una respuesta popular a la historia de opresión y explotación de sus cuerpos y territorios. Sin embargo, también fue un momento clave para las mujeres indígenas, ya que su masiva participación en estos enfrentamientos marcó nuevos horizontes en términos de resistencias sociales y derechos en una sociedad dominada por el patriarcado.

Ante este panorama, el objetivo es analizar la participación social y los derechos políticos de las mujeres indígenas y campesinas en Bolivia durante las guerras del agua y del gas, desde una perspectiva feminista. Se destaca su contribución, desafíos y luchas en los movimientos sociales y en la reconfiguración del escenario político del país, a menudo poco visibilizadas en su memoria histórica. No se trata de un trabajo antropológico ni sociológico, sino de un estudio de filosofía política basado en una revisión histórica analítica, destacando principalmente el papel de las mujeres indígenas y campesinas en las movilizaciones sociales de 2000 y 2003.

### **Bolivia y las crisis sociales: antecedentes**

En el caso de Bolivia, la memoria, es decir, la acumulación de proyectos y desarrollos históricos que atraviesa generaciones y ha constituido los distintos regímenes políticos y las estructuras sociales, es determinante para entender el surgimiento de las organizaciones y los movimientos sociales y, por ende, reflexionar sobre la



participación de las mujeres en cada uno de estos espacios sociales de acción colectiva. Esta memoria acentúa, por lo menos desde tres horizontes distintos, pero no desconectados, el desarrollo de un fenómeno peculiar en América Latina: el de organización e incidencia social y política de los campesinos, pueblos originarios y de las mujeres a través de diferentes mecanismos de participación y apropiación de los espacios públicos. El primero es la memoria a largo plazo (colonización) y todos los aspectos derivados de este proceso (el Estado boliviano de agosto de 1825); seguido está la memoria a mediano plazo (el Estado nacional-popular de los años 50) y, tercero, la memoria a corto plazo (las luchas antineoliberales y los procesos de rebelión a partir del 2000) (Tapia, 2007).

El entrecruce que existe entre los distintos procesos históricos, políticos y sociales en este país imposibilita, hasta cierto punto, no toparse con los diferentes acontecimientos de largo y mediano plazo en cada uno de los levantamientos populares que constituyen defensa de sus derechos y del territorio. En América Latina, la colonialidad exacerbó la opresión de las comunidades indígenas y la aniquilación de lo *puramente* originario; a partir de ese momento se entrelazaron costumbres, tradiciones, culturas, etcétera, arraigadas a la procedencia de las conquistas que han perdurado hasta la actualidad. Las mujeres indígenas, eventualmente, han experimentado doblemente estas opresiones (por ser mujeres e indígenas) al instaurarse un sistema que invisibiliza sus derechos o reproduce “las condiciones que omiten y coadyuvan a la opresión de las mujeres al no contabilizar su existencia y al no considerarlas como parte de la sociedad, del

desarrollo y de la democracia” (Lagarde, 1996, p. 16). Esto ha sido posible por el sujeto renacentista-ilustrado encarnado en Europa es universal y masculino, lo que marca, como afirma Rivera Cusicanqui (2010), un primer acto de colonización del género: mujeres en el hogar gobernadas por el modelo *paterfamilia* que los legisladores bolivianos copiaron y adaptaron.

A partir de 1952, con la revolución campesina, en Bolivia se avanzó significativamente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios con la democratización del Estado y, con esto, se dio origen a nuevas formas de resistencia popular y luchas sociales. Pero, las décadas siguientes, especialmente la de 1980, como da cuenta Morales (2009), con el aterrizaje del capitalismo y neoliberalismo, se marcaron varias crisis distintas relacionadas con el ajuste al despliegue estatal de la economía: despido de trabajadores públicos y mineros, sanciones por parte del Banco Mundial, la hiperinflación, y la precariedad en términos de los derechos de las mujeres, entre otros factores que marcaron críticamente la estabilidad del pueblo boliviano y generó reformas económicas, múltiples conflictos y represiones sociales. Durante estos acontecimientos, las mujeres indígenas también se organizaron y participaron para luchar contra las políticas de represión estatal y desigualdades de género, bajo una federación de mujeres que recuperó de la figura de Bartolina Sisa para reivindicar y luchar por sus derechos; desde allí, las mujeres denunciaban que:

En el campo, la más sacrificada es la mujer, porque trabaja mucho. Trabaja en la casa, atiende al marido, a la *wawa*, teje la ropa de la familia, cuida el ganado, ayuda a sembrar y cosechar. [...]. La campesina está también marginada de la educación [...]. Cuando las mujeres tratan de organizarse, preguntan primero al esposo; la mujer no toma una decisión por sí sola. Pero ya ha llegado la hora de que las mujeres pensemos por nosotras mismas y formemos nuestras propias organizaciones. (Mejía, 1984 p. 10, como se citó en Padilla Poveda, 2014, p. 126)

Este escenario muestra que las formas de opresión y violencia contra las mujeres indígenas se ejerce desde múltiples estructuras de poder, como el racismo, clase, género, etcétera, o, como afirma Lugones (2008): la interseccionalidad, que se refiere a la interacción y superposición de diferentes formas de opresión. Asimismo, estas experiencias muestran que las formas de dominación contra las mujeres indígenas tienen un carácter profundo en las estructuras sociales que está arraigado a las propias cosmovisiones originarias, pero que logró fortalecerse ampliamente con la colonialidad en cada una de las esferas sociales y la vida cotidiana. La historia de las luchas por los derechos de las mujeres indígenas en Bolivia ha estado marcada por racismo, clase social, género, pobreza extrema, entre otros, que se han configurado como mecanismos ralentizadores en la conquista de los diferentes espacios sociales y políticos; pero

que también dan cuenta de todo un trabajo continuo desde los diferentes espacios comunales que han trascendido como resistencia social contra las diferentes políticas del Estado, particularmente desde las marchas cocaleras de los años 90, generando mayor visibilización y fortalecimiento para sus organizaciones.

En estas marchas, también conocidas como marchas por la vida, hubo una amplia participación de las mujeres indígenas que, pese a sortear con la intermediación de los hombres de su organización se presentaron como representantes del movimiento social y buscaron ser escuchadas y consideradas en la resolución de estos conflictos.

Tras 10 días de ayuno voluntario y gracias a la intervención de la COB (Central Obrera Boliviana), se reinician las conversaciones el 2 de febrero de 1996 y se llega a un acuerdo entre el gobierno, la COB, las cinco federaciones del trópico, las mujeres cocaleras, los productores de coca y la Confederación de Colonizadores, el 3 de febrero de 1996. (Pinto Ocampo, 2004, p. 14)

Esta lucha popular logró que se archivara el proyecto de erradicación del cultivo de coca bajo las presiones del régimen estadounidense, pero este fue apenas el comienzo de un capítulo de luchas y movilizaciones sociales que culminarían en 2003 con la guerra del gas en El Alto y La Paz.

En estos dos últimos episodios hubo una amplia participación social de las mujeres indígenas y campesinas, pero su visibilización, en la mayoría de los casos, se debe a los reportes de algunos periódicos de la época, así como a testimonios y entrevistas realizadas por varios autores y autoras a mujeres que participaron en estas manifestaciones sociales. Como se verá más adelante, los aportes de las mujeres en estos periodos de levantamiento popular no fueron actos menores, sino que constituyen parte integral de los cambios y consignas que el pueblo logró establecer mediante la movilización y organización social.

En Bolivia, la participación popular a través de los movimientos sociales se fortaleció a través de los años, pero particularmente, durante la guerra del agua y del gas en 2000 y 2003, porque fueron momentos claves de resistencia neoliberal, de acción colectiva y de reivindicación de los derechos de los campesinos e indígenas. Estos dos episodios son fundamentales para pensar los sectores populares, especialmente las comunidades indígenas y campesinas, por ser los principales actores sociales. Pero, detrás del esfuerzo y las constantes luchas de las organizaciones sindicales y movimientos sociales, está el trabajo de ciento de mujeres que ha sido poco visibilizado y dignificado en las luchas populares.

Es así como la historia de Bolivia está conformada por las constantes luchas contra las formas de opresión y la búsqueda de justicia social, considerando que la memoria colectiva es fundamental en el marco de las luchas y los cambios sociales. El activismo y la participación popular de las mujeres indígenas en cada uno de

estos fenómenos sociales fueron fundamentales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, la defensa de la vida y los territorios, pero también para construir, desde esas emergencias políticas, económicas y sociales, nuevos sujetos políticos y formas de reivindicar sus derechos a través de la movilización social y la construcción de aparatos teóricos desde sus realidades y experiencias. Para destacar y reivindicar la participación de las mujeres durante las guerras del agua y del gas, se examinarán las causas y estructuras que generaron estas luchas sociales, así como el papel de los líderes y organizaciones más visibles, según las fuentes históricas. Posteriormente, se analizará la participación social de las mujeres en estos eventos, en el contexto de sus derechos.

### **La guerra del agua**

De acuerdo con Crespo Flores (2000), dos fueron las principales causas de la guerra del agua en Cochabamba: 1) la concesión del agua por parte de la empresa municipal SEMAPA a un consorcio internacional denominado “Aguas Tunari” y 2) la aprobación no consensuada de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en octubre de 1999. El lugar geográfico en el que se encuentra Cochabamba es considerado semiseco, esto implica un mayor cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, por lo cual, dar licencias administrativas a empresas internacionales rompe con la forma tradicional de los pueblos y comunidades de acceder

y conservar el recurso. En Cochabamba ya se habían registrado resistencias por parte de campesinas-campesinos a la explotación del líquido potable debido a este problema administrativo, pero no de manera trascendente. No obstante, los desacuerdos fueron creciendo y, de esa forma las movilizaciones sociales también se fortalecieron, lo que logró unificar otros grupos sociales que no estaban previamente unificados, como los estudiantes.

En su “Manifiesto a Cochabamba”, voceros de la flamante coalición de organizaciones sociales contra la privatización del agua denominada “La Coordinadora del Agua” anunciaron, a partir de ese momento, que los derechos no pueden mendigarse y, en ese sentido, reafirmaron su lucha: “Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los malos gobernantes” (Kruse, 2005, p. 146). Ante esto, la respuesta del Estado fue represión militar en lugar del diálogo y acuerdos concretos, agudizando, de esa forma, la crisis social y motivando la organización y lucha popular. La militarización, muchas veces de las calles y la ciudad, dejó decenas de muertos y heridos, pero los manifestantes no estuvieron dispuestos a ceder ni a retroceder. Al contrario, a estas movilizaciones se le sumó el apoyo de dos importantes organizaciones sindicales: “la de los cocaleros del Trópico (con influencia de Evo Morales) y la mayoría de la CSUTCB (Confederación sindical única de los trabajadores campesinos de Bolivia) guiada por Felipe Quispe” (Neso, 2013, p. 215).

Los enfrentamientos no cesaron sino hasta mediados de octubre de 2001. Para ese momento, las movilizaciones y las protestas

sociales eran más fuertes, más organizadas, de tal modo que el ejército y la policía no tuvieron la capacidad de liberar las carreteras de los bloqueos, por lo cual, tuvieron que retirarse. Así y tras todo un periodo y proceso de resistencia por parte de los manifestantes, la Ley del agua quedó archivada, lo que constató el trabajo de la acción colectiva de los sectores populares, la memoria y reivindicación de sus derechos. Ese mismo año, el gobierno nacional presentaría un proyecto para la privatización y exportación del gas, lo que generaría nuevos conflictos sociales más adelante.

### **La guerra del gas**

En Bolivia, durante los años 90 se descubrieron grandes yacimientos de gas natural, que despertaron el interés de los mercados extranjeros para suplir las necesidades de este producto en el mercado. Ante esto, multinacionales como Repsol, British Gas y BP-Amoco presentaron un proyecto-plano de utilización de este recurso para cubrir el déficit de gas en el Oeste de los Estados Unidos. La propuesta fue presentada en 2001, poco después de archivar el proyecto de privatización del agua en Cochabamba. Según los registros históricos, el gas se licuaría y se transportaría en ese estado hasta México; una vez allí, se transportaría a los Estados Unidos en estado gaseoso. Pero, en el fondo de esta crisis también estuvo “el proyecto de ampliación de la transnacionalización en la explotación y comercialización de los hidrocarburos a través de Chile” (Tapia, 2013, p. 127).



Como se ha señalado, la llegada e implementación de las políticas del neoliberalismo produjo ciclos de movilización social en Bolivia, los cuales introdujeron a campesinos, mujeres, estudiantes y comunidades indígenas en general, quienes se sumaron a las distintas movilizaciones en defensa del territorio y la dignidad humana. A inicios de 2003, el gobierno implementó un plan conocido como “el impuestazo” afectando a la clase social más vulnerable. Este ajuste bloqueaba los sueldos de los trabajadores públicos y gravaba las rentas bajas con el fin de cubrir el déficit de caja de ese momento. Esto generó descontento y malestar social, impulsando los primeros enfrentamientos populares contra la policía y las fuerzas militares.

Si bien los enfrentamientos populares tuvieron estos antecedentes, la guerra del gas, podría decirse, estuvo atravesada por tres dimensiones importantes: la primera, tiene que ver con las cosmovisiones indígenas y de los pueblos originarios: la defensa del territorio. Esto es una cuestión que también está presente en otras organizaciones y movimientos sociales más recientes, como en el caso del feminismo comunitario: cuerpo-territorio. En esta defensa también estuvo el hecho de que la enajenación de las reservas gasíferas conllevaba a un profundo cambio en las nociones de soberanía, futuro, nación e impuesto, introducido por el gobierno de Sánchez de Lozada a través de la explotación de los recursos naturales y los demás ajustes presupuestales de la sociedad boliviana (Moras, 2007).

El segundo aspecto tiene que ver con la memoria a largo plazo (la colonialidad/colonización). Bolivia es el país de América Latina con la mayor población indígena, pueblos y comunidades que han sido invisibilizados, segregados, marginados y excluidos durante décadas por los diferentes regímenes políticos, hegemónicos y de poder, desplazándolos socialmente hacia la lucha. Por ende, las reivindicaciones indígenas ligadas a la resignificación de sus principios, valores y cultura también tomaron lugar y fuerza en todos estos enfrentamientos contra el Estado monocultural y excluyente. El tercer aspecto es la unificación de los movimientos sociales en una sola demanda. Su presencia en las calles, modos de organización y la unificación, una vez más, de los distintos sectores y organismos de lucha populares, entre otros factores, hicieron que las políticas y las transformaciones de las sociedades bolivianas y de América Latina en general tuvieran un cambio trascendente, en particular, desde la guerra del agua en adelante.

Durante este periodo de crisis y de enfrentamientos sociales-populares, también hubo presencia de Evo Morales y Felipe Quispe, como líderes y miembros de las organizaciones y movilizaciones. Su protagonismo también impulsó y motivó a que miles de campesinos se unieran y ofrecieran su apoyo. Entre las organizaciones y movimientos presentes en las marchas y protestas de la guerra del gas está la Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del gas y los Recursos Naturales, de carácter social. Esta organización no tenía líderes, sino portavoces y se componía de organizaciones sindicales cuyo objetivo giraba en torno a las demandas de la defensa

de los recursos naturales, el territorio y la vida (Garay Vera y Mendoza Pinto, 2015).

Otro de los movimientos presentes en estas protestas y movilizaciones fue el Movimiento al Socialismo, conocido como el MAS, de carácter campesino. Fue creado en 1995 durante las manifestaciones contra la erradicación del cultivo de hoja de coca. Su objetivo estuvo orientado en la refundación del Estado boliviano a través de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también a la soberanía y protección de los recursos naturales. Su líder fue el expresidente Evo Morales, que para miles de bolivianos encarnaba los principios y valores de los pueblos originarios y, por tanto, la lucha por la dignificación de estas comunidades. Asimismo, también hubo presencia canónica del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por Felipe Quispe y creado en el 2000, cuyos antecedentes están ligados a la guerra del agua. Este movimiento fue creado por los campesinos del Altiplano y es de carácter indianista, que forma parte del sustento ideológico y organizativo de los procesos de emergencia indígena. Hubo otros movimientos cuya fundación es mucho más antigua, como lo fue la Central Obrera Boliviana (COB), creada en 1952 por mineros de la época. También participó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fundada en 1979 por campesinos de varias comunidades indígenas como quechua, aymara, entre otras organizaciones, pero estas son las que más se destacan en cada uno de los registros y literatura histórica sobre estos episodios.

Entre lo que se conoce como febrero negro a octubre rojo, sobresalen varias etapas cronológicas de los enfrentamientos y el desenvolvimiento de las manifestaciones en el territorio nacional, siendo septiembre y octubre los meses más agitados por estos acontecimientos. Ante los continuos bloqueos, el 15 de septiembre de 2003, el gobierno como respuesta detuvo y encarceló a varios manifestantes bajo la Ley 2494 sancionada el 4 de agosto de ese mismo año, la cual reza:

Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, proyectos y programas emergentes del poder público y de todas las personas de la comunidad, en el país y en los diferentes departamentos, sin discriminación ni exclusión alguna, destinados a asegurar el libre ejercicio de los derechos, garantías y libertades constitucionales brindando mayor seguridad a la población procurando una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del territorio Nacional. (Ley 2494, 2003)

Dos días más tarde, los manifestantes, frente a toda la represión y las detenciones militares, manifestaron estar dispuestos “a derramar sangre si era necesario” con tal de avanzar hacia La Paz. En ese escenario, bloquearon casi todas las carreteras que conectaban con El Alto, mientras al menos tres mil campesinos más decidían si se

unían a la marcha hacia La Paz. Con el lema: “el gas no se vende, carajo”, el 18 de septiembre un poco más de diez mil campesinas y campesinos se organizaron para bloquear las vías de comunicación con sede del gobierno, al sur de La Paz. El 20 de septiembre, tras el rompimiento de los negocios con el gobierno, Felipe Quispe llamó a las movilizaciones a defenderse con armas si era necesario.

Entre los primeros días de octubre, el gobierno llamó a Quispe a las negociaciones, mientras los movilizados comenzaron a exigir la Asamblea Constituyente. La respuesta del gobierno, minutos después, fue hacer públicas las amenazas de reprimir las protestas a través de los medios de comunicación. Para ese entonces ya se hablaba de decenas de heridos, muertos, detenidos y reprimidos como saldo de las manifestaciones populares y la presencia militar. El presidente Gonzalo Sánchez, lejos de poder controlar y reprimir a las movilizaciones, terminó huyendo a los Estados Unidos con cerca de tres millones de dólares, los cuales provenían de las cajas del Estado. El 17 de octubre, el Congreso boliviano, tras la huida de Sánchez, nombró un nuevo presidente, el cual tuvo el mismo destino que su antecesor unos seis meses después.

### **El panorama de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia en la década de los 90 e inicios del 2000**

El contexto de los derechos políticos de las mujeres bolivianas en la década de los 90 e inicios del 2000 es un tema complejo y, como

cabe esperarse, son parte de las consignas reconocidas por las luchas de las mujeres. En 1995, en Bolivia se aprobó la Ley 1674, conocida como la Ley Contra la Violencia Doméstica. La aprobación de esta Ley fue importante porque promulgó la lucha contra la violencia de género y estableció medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica, permitiendo, asimismo, la persecución de los agresores. En 1997, se aprobó la Ley 1779 de 1997, llamada Ley de cuotas o de género; quizá la más significativa en términos de participación y representación para el caso de las mujeres bolivianas de la época. Es así como:

recién en la década del 90 adquirieron relevancia las demandas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a través de los movimientos organizados y la influencia de la Conferencia de Beijing (1995). Como parte de este proceso, algunos avances alcanzados han sido institucionalizados a través de instrumentos normativos. (Zegada, 2006, como se citó en Albaine, 2009, p. 2)

Sin embargo, la sanción de la Ley 1779 no tuvo efectos inmediatos en la vida cotidiana de las mujeres ni en la sociedad boliviana en general. Por una parte, la cantidad de cargos y los requisitos para ejercer los derechos civiles de las mujeres seguían siendo más limitados que los de los varones. “Con poder y recursos fiscales, los municipios se convirtieron en un espacio de disputa masculinizado.

Con poder y dinero, la política no tenía lugar para las mujeres” (Brockmann Quiroga, 2017, p. 266). Por otra parte, desde la aplicación de la norma, el hostigamiento y acoso por parte de los varones hacia las pocas mujeres que lograron ocupar determinados cargos se hicieron presentes, configurando nuevas prácticas y modos de violencia, exclusión y represión de sus derechos, pese a estar protegidos legislativamente. “En noviembre del 2000, varias concejalas electas en los comicios de diciembre del año anterior en Bolivia rompieron el silencio para denunciar actos de hostigamiento y violencia, experimentados en el ejercicio de sus funciones” (Brockmann Quiroga, 2017, p. 263). Sus agresores pretendieron obligarlas a renunciar a su cargo político, el cual estuvo legitimado en las urnas.

Hubo obstrucciones formales e informales, como da cuenta Albaine (2009), a nivel municipal y nacional, que “frenaron” la participación política de las mujeres en aquella época. Asimismo, el acceso a la participación política en cargos administrativos y demás no estuvo garantizado; para las mujeres indígenas y campesinas, acceder a este tipo de posicionamientos seguía obstruido, además de lo anterior, por cuestiones de clase, roles sexuales y ocupaciones domésticas cotidianas, entre otros. Esto “obligó” a las mujeres bolivianas, especialmente a mujeres indígenas y campesinas a adentrarse en un proceso para tejer redes de lucha y resistencia contra el conjunto de prácticas patriarcales que se resistían a su emancipación política. Históricamente, las organizaciones de mujeres como Bartolina Sisa fueron marcando pautas y abriendo caminos para que otras mujeres se abanderaran en la lucha a lo largo de los años, igualando las

jerarquías con los varones desde las propias organizaciones, siguiendo un proceso de construcción identitario propio a lo largo de los años, como da cuenta Sánchez Echeverría (2015).

Durante esta misma década, el feminismo autónomo radical y anarquista representaba las demandas de las mujeres indígenas en Bolivia. Mujeres Creando, un movimiento feminista autónomo nacido en 1992 y liderado por María Galindo, se tomaba las calles y los muros para protestar a través del grafiti; justamente porque ese era el espacio que la sociedad les negaba a las mujeres. La apropiación y participación política de las mujeres surgió en las calles, en la protesta, en los actos pedagógicos por construir otro más justas para todas y todos. De esa forma, la lucha de las mujeres indígenas y campesinas —que han sido mayormente invisibilizadas en la historia—, comenzó a representar una crítica frontal al patriarcado, abogando por la participación política y sus derechos. Estos esfuerzos desafiaron las estructuras de poder hegemónicas que históricamente las han excluido de diversos espacios y escenarios políticos y sociales. Con grafitis llenos de mensajes de denuncia, estas mujeres buscaban dismantlar las jerarquías y formas de opresión desde los espacios públicos acentuados por el patriarcado. Ahora bien, cuando se trata de las mujeres indígenas, la violencia se intercepta de múltiples formas que van más allá del género y es diferenciada en comparación con las mujeres blancas y de clase alta. María Lugones llama a esto interseccionalidad, es decir, el entrecruce de distintas formas de opresión que tienen que ver con la raza, el género y la clase a la que socialmente se pertenece (Lugones, 2008).



Esto explica, hasta cierto punto por qué en Bolivia, como en otros países de la región, las mujeres indígenas y mujeres campesinas han sido más marginadas social y políticamente que otras mujeres. Incluso, desde los registros históricos de la década de 1920 puede notarse, claramente, cómo las demandas de las trabajadoras (mineras, en el mayor de los casos), no hacían parte de las demandas de las mujeres de clase alta. Se trató del Ateneo femenino, una de las primeras organizaciones feministas de Bolivia que velaba, inicialmente, por los intereses y derechos de las mujeres de clase alta.

El Ateneo Femenino organizó en 1925 “una primera Convención de Feministas que reunió a una comisión con el fin de analizar la Constitución para incluir el derecho de voto para las mujeres que sabían leer y escribir” [...]. En esta participaron, según Álvarez (2011), “la Federación Obrera del Trabajo (FOT), la Federación Obrera Femenina (FOF) y del Sindicato Femenino de Oficios Varios”. La misma “fracasó puesto que hubo discordancias entre las mujeres de los centros femeninos y las mujeres sindicalistas en cuanto a objetivos, reivindicaciones e incluso concepciones del lugar que ocupaban las mujeres en la sociedad”. (Álvarez, 2011, p. 7, como se citó en Cuevas Velázquez, 2022, p. 2)

Esto refleja que las mujeres indígenas y campesinas al estar en un lugar socialmente más subordinado y vulnerable, no son

meramente invisibilizadas dentro de sus propias comunidades, sino también por las organizaciones y movimientos feministas urbanos, generalmente liderados por mujeres de clases altas y con realidades muy diferentes que llegan a considerar las luchas de las mujeres desde la idea de un sujeto universal. Esto hace que las luchas de las mujeres indígenas tiendan a ser más lentas, porque los espacios en los que están inmersas atraviesan la colonialización, las cosmovisiones, los roles comunitarios, el género, etcétera. Asimismo, sus luchas también están vinculadas a los derechos de sus territorios y de los recursos naturales, porque su explotación repercute en el bienestar y la vida humana. Son demandas que reconocen sus identidades, implicando la construcción de redes y espacios de apoyos que impliquen luchas de despatriarcalización, es decir, de promover la educación y participación de las mujeres en la sociedad para dismantelar y resistir al patriarcado.

El trabajo de visibilización de los derechos de las mujeres indígenas es arduo, ya que múltiples factores se oponen constantemente a su liberación. En el hogar, por ejemplo, se lucha contra la naturalización de los roles de género en el trabajo, lo cual no es un problema menor porque sirve para justificar la violencia institucional, instrumental y extractivista sobre sus territorios y cuerpos. Desde esta perspectiva, el trabajo doméstico es mucho más que la mera limpieza de la casa, como afirma Federici (2018), es servir a quienes ganan el salario física, emocional y sexualmente, y también prepararlos para el trabajo día tras día, sin libertad de protestar. Es la crianza y el cuidado de los hijos, los futuros

trabajadores, desde su nacimiento y durante sus años escolares, ayudándolos y asegurándose de que actúen de acuerdo con las expectativas bajo la lógica del capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado. Esto significa que detrás de cada fábrica, empresa u oficina se oculta el trabajo de millones de mujeres que han consumido su energía, su fuerza y, en suma, su vida física y emocional (Federici, 2018). De tal manera que, para las mujeres indígenas, los aspectos como el territorio-cuerpo-tiempo son relevantes en sus luchas, porque el valor de la vida y la integridad humana no está separado de los espacios que los seres humanos ocupan y de los que se sirven. Esta misma preocupación, por decirlo de algún modo, implica enfrentarse a las estructuras hegemónicas desde sus espacios de acción y bajo la reafirmación de sus identidades, tradiciones, memoria, entre otros aspectos relevantes para sus luchas.

Los avances jurídicos y políticos sobre los derechos de las mujeres en los años 90 y principios del 2000 establecieron nuevas pautas para fundamentar y articular otro tipo de luchas y propuestas feministas. Estas luchas son de corte antipatriarcal, antiracial, antineoliberal y, en suma, contra-hegemónicas, como las del feminismo comunitario que surge de la convergencia de dos vertientes importantes de las luchas populares en Bolivia: el feminismo autónomo boliviano y los movimientos sociales que participaron en el proceso de cambio histórico durante las guerras del agua y del gas. Este movimiento feminista se caracteriza por su enfoque en la comunidad, la despatriarcalización, la descolonización y la autonomía, que busca resistir y desafiar las estructuras de poder patriarcales

y neoliberales. Reconoce que las mujeres indígenas y campesinas desempeñaron un papel fundamental en la construcción de este movimiento y en los acontecimientos históricos de protestas y manifestaciones, aspirando a una sociedad más justa e igualitaria.

### **Las mujeres en las movilizaciones sociales de 2000 y 2003 en Bolivia**

Desde 1993, bajo las fuertes presiones estadounidenses por la erradicación de los cultivos de coca y la lucha contra el narcotráfico, se suscitaron una serie de conflictos en Bolivia que dieron paso a la conformación de organizaciones sociales, particularmente de mujeres cocaleras. Pinto Ocampo (2008), afirma que el conflicto por la defensa de la vida y del cultivo de coca entre campesinos y el régimen hegemónico respaldado por el gobierno boliviano ya tenía varios años, pero fue durante la primera mitad de la década de los 90 que los enfrentamientos se agudizaron y se propagaron las organizaciones y marchas sociales en el territorio.

La participación de las mujeres en las distintas manifestaciones sociales por la defensa de la hoja de coca y de la vida fue notoria. Esto se visibilizó a tal punto de que los dirigentes y representantes de los productores (varones) decidieron, en dos Congresos ordinarios consecutivos de las Federaciones del Trópico en 1992 y 1994, impulsar la organización de las mujeres (Zabalaga, 2004, p. 7). Estas organizaciones estuvieron lideradas por Margarita Peredo y

Eulogia Matías, quienes se encargaron de constituir una unificación de las mujeres de las diferentes regiones a través de una serie de acercamientos durante algún tiempo. En 1992, las mujeres ya habían participado activamente en las movilizaciones y acciones de defensa llevadas a cabo durante ese año.

La participación de las mujeres campesinas e indígenas en las marchas por la vida y por la coca no fue meramente a través de la movilización social en su función de protesta y de la toma de los espacios públicos. A finales de 1995, el mismo año en el que se agudizó la violencia y represión del Estado hacia los manifestantes, hubo dificultades para llegar a determinados acuerdos y, de ese modo, rupturas de diálogo entre los dirigentes de los cocaleros de la época y la Central Obrera Boliviana (COB) con el gobierno. Sobre ese escenario, las mujeres cocaleras, muchas de ellas integrantes de la Organización de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, tras habérseles negado hablar con el presidente por ser mujeres, decidieron hablar de mujer a mujer con la primera dama y la esposa del vicepresidente con el fin de que estas sensibilizaran a sus maridos frente a la crisis desencadenada; requerían diálogo y que las peticiones propuestas por parte de los manifestantes fueran escuchadas y consideradas (Pinto Ocampo, 2004).

Negar a las mujeres la posibilidad de hablar con el presidente muestra la intersección de las múltiples formas de opresión relacionadas con el género, la etnia y la clase social. Refleja el lugar que ocupan las mujeres como sujetas subalternas, asumiéndolas incapaces de dialogar, debatir y proponer alternativas políticas en los

diferentes escenarios y contextos sociales. Sin embargo, el hecho de que las mujeres cocaleras consiguieran hablar con la primera dama y la esposa del vicepresidente es un ejemplo significativo de resistencia y agencia en un contexto de exclusión e invisibilización patriarcal. No se trató de un acto aislado o menor, ya que buscaron ser escuchadas y construir espacios legítimos de diálogo, desafiando las estructuras patriarcales en busca del reconocimiento de sus derechos y causas de protesta.

Su participación en las manifestaciones sociales generadas por los conflictos de la hoja de coca fue extensa y se presentó a través de diferentes federaciones. Las mujeres de la provincia del Chapare, donde comenzaron estos conflictos, se organizaron y crearon la Federación de Mujeres del Trópico. En este marco, se crearon principalmente la Federación de Mujeres de Carrasco Tropical en 1994, a cargo de Felipa Sánchez y Enriqueta Mendieta; la Federación Única de Mujeres de Centrales Unidas en 1995, liderada por Eufrosina Rodríguez y Elena Poma, en la que Margarita Terán se unió como ejecutiva en 1997; la Federación Campesina de Mujeres del Trópico (FECAMTROP) en 1995, liderada por Margarita Peredo y Eulogia Matías; la Federación de Mujeres de Chimoré en 1996, con Elena Almedras como ejecutiva, en la que también participaron Juana Quispe y Lourdes Gaspar; la Federación de Mujeres de Mamoré en 1997, a cargo de Eugenia Caveró como ejecutiva y, finalmente, en 1999 se creó la Federación de Mujeres de Yungas Chapare, liderada por Emiliana Salcedo (Pinto Ocampo, 2004).

Todas estas federaciones organizaron y participaron en una serie de congresos ad hoc de mujeres, con el fin de rechazar las propuestas de mercantilización de la tierra y territorio, la violación de la soberanía por parte del gobierno estadounidense, exigir el respeto a la vida, exigir igualdad de derechos para hombres y mujeres, el derecho a ser dirigentes y tener clara participación en los asuntos políticos, entre otros aspectos importantes. Esto no solo demuestra que las mujeres se estaban apropiando de los distintos escenarios sociales de múltiples formas, sino que cada vez se generaba una conciencia colectiva y necesidad de avanzar en otros aspectos esenciales de la vida cotidiana: sus derechos. Las marchas por la coca no solo marcaron el inicio de las grandes movilizaciones sociales en Bolivia, también contribuyeron a que los colectivos de mujeres, las más invisibilizadas históricamente, emprendieran la lucha por sus derechos y los de sus pueblos, desafiando las distintas formas de opresión patriarcal dentro y fuera de sus comunidades.

Ahora bien, en cuanto a las crisis del agua y del gas, miles de mujeres formaron parte de las protestas, al igual que en las marchas cocaleras, campesinas, indígenas y empobrecidas que salieron a las calles a participar en la lucha. Cuando se suele pensar en estas dos crisis sociales de inicios del 2000 desde una perspectiva de género, son pocos los registros que se refieren directamente a la participación de las mujeres; lo común, en pleno auge de los movimientos sociales y la participación popular, es registrar los acontecimientos desde categorías como campesinos, indígenas, estudiantes, etcétera, es decir, una lucha y victoria del pueblo. Esto, desde luego, no

implica la ausencia de las mujeres en cada una de las protestas, porque es claro que los acontecimientos desencadenados por la privatización del agua en Cochabamba y la exportación del gas estuvieron atravesados y diversificados por la fuerza colectiva y el trabajo conjunto de las mujeres, particularmente campesinas e indígenas, pero también desde los feminismos autónomos de la época.

Sucede a menudo que los protagonistas, escritores y guionistas siguen prestando poca relevancia a la visibilización de las mujeres en los procesos sociales que tienen que ver con la historia de un país; no le da el mérito que merece el trabajo que las mujeres realizan de forma particular, sino que usan categorías no incluyentes, invisibilizando y minimizando su participación y lucha en cada uno de los levantamientos sociales. Por pequeño que parezca, es importante reconocer los episodios en los que se menciona a las mujeres, porque desde allí se abren caminos de luchas y reconocimientos de sus derechos. Un ejemplo de esto es que, el primer día de insurrección por el agua, desde tempranas horas de la mañana comenzaron las congregaciones de miles de manifestantes: “La característica fue el uso de pancartas, carteles, pañuelos blancos, mixtura y serpentina. Las personas concentradas fueron mujeres, niños, ancianos y personas mayores” (Salazar, 2011, p. 132).

Otra de las pocas referencias específicas al papel de las mujeres en estas movilizaciones es un relato peculiar relacionado con la Coordinadora del Agua, que refleja la participación activa de las mujeres en todo el proceso de lucha y rebelión. Se dice que “al principio del



conflicto surgió una confusión —no muy casual— cuando dirigentes de la Coordinadora buscaron refugio en un convento. Las religiosas aceptaron refugiarlos y preguntaron: ‘¿Y dónde está la señora Coordinadora? Será una mujer muy valiente, ¿no?’” (Peredo Beltrán, 2003, p. 29). Esto, lejos de ser un simple episodio o una anécdota, se convirtió en una identidad colectiva, un símbolo de la participación y el trabajo de las mujeres durante las protestas.

En estas manifestaciones también hubo fuerte represión militar que dejaron todo tipo de víctimas, Salazar Ortuño (2011), afirma que hubo decenas de mujeres heridas por impactos de balines, gases y flagelaciones dejadas tras los enfrentamientos con las fuerzas militares, pero no fue suficiente para contener a los manifestantes, particularmente a las mujeres que apoyaron las movilizaciones desde los diferentes escenarios. En otros medios de comunicación de la época, como el Periódico *Opinión*, se menciona lo siguiente:

El papel de las mujeres fue loable: Las amas de casa salieron hasta sus puertas con agua, trapos, limones y vinagre ayudando a contrarrestar los efectos irritantes de los gases lacrimógenos. Algunos manifestantes recibieron alimentos de los ciudadanos y grupos que los prepararon, como forma de agradecimiento. Los logros del congelamiento de tarifas y de luchar por los intereses de la población beneficiarán a todos, gracias a la participación de la gente en las protestas. (Periódico *Opinión*, Cochabamba 8 de abril de 2000, como se citó en Salazar Ortuño, 2011, pp. 189-190)

En otros periódicos, como *Los Tiempos*, también se relata parte de las múltiples formas en que las mujeres participaron y ayudaron en estas movilizaciones sociales.

Decenas de mujeres se dieron cita en la Plaza de Armas con bidones y bolsas de alimentos para saciar el hambre y la sed de los manifestantes que en reiteradas oportunidades gritaban a voz en cuello y al unísono: ¡Bánzer asesino! (*Los Tiempos*, 10 de abril de 2000, A-6, como se citó en Salazar Ortuño, 2011, p. 211)

Visibilizar la participación y el reconocimiento social de las mujeres indígenas en estas movilizaciones no ha sido una tarea fácil y, en la mayoría de los casos, forma parte de la recuperación de los diarios y periódicos que hicieron alusión al desarrollo informativo de las manifestaciones y conflictos sociales de la época. Detrás de esto está el esfuerzo de muchas personas, lo cual contribuye a la visibilización de que las organizaciones de mujeres han sido fundamentales para pensar los momentos de cambios más significativos en el caso boliviano. También está el esfuerzo de quienes han elaborado trabajos de campo, recuperando relatos y testimonios de mujeres que participaron durante la guerra del agua y del gas, como el de María Esther Udaeta, en 2006, quien entrevista a varias mujeres que relatan lo siguiente:

Enfrentábamos la represión policial, con piedras y palos. En algunos casos salíamos en defensa de los detenidos y tratábamos de recuperarlos. [...]. Además, las mujeres son las que dan el valor –somos más decididas– Más fácilmente apresan a los hombres a los jovencitos, en cambio a las mujeres es un poco difícil, nosotras siempre los páramos. (Udeata, 2006, p. 179)

Otra de las mujeres entrevistadas relató que:

Porque era evidente que había participación de las mujeres, pero no se nos tomaba en cuenta, verdad, quienes iban a dirigir, quienes iban a conformar la comisión que iba a formar parte de la Coordinadora y que iban a venir a representar a la Coordinadora eran solamente hombres y las mujeres teníamos que hacer otra clase de actividades, pero menos ir a la cabeza. (Udeata, 2006, p. 180)

Durante la guerra del gas no fue muy diferente; miles de mujeres salieron a las calles durante las protestas. Al igual que en la guerra del agua, los periódicos y testimonios son los medios que más dan cuenta de su múltiple participación social, porque no se trató meramente de resistir en las calles, sino de contrarrestar la violencia ayudando a los heridos, cocinando, proporcionando debates e ideas,

participando en sus organizaciones, etcétera. “Hemos salido en defensa del gas. Gas quieren venderse. Nuestros hijos, ¿en qué va a quedar? Ya vamos a defender nuestros hijos, nuestros nietos” (Cabezas Fernández, 2006, p. 78). Estas son palabras de otro testimonio de las mujeres que participaron en la lucha social durante la guerra del gas, que dan cuenta de su inmensa participación social en estos conflictos, los cuales lograron expulsar a varias multinacionales extranjeras e iniciar un proceso de cambio en las estructuras sociales de este país.

### Conclusiones

En Bolivia, la revolución campesina de 1952 y el aterrizaje del neoliberalismo en los años 80 fueron clave para comprender las organizaciones y manifestaciones sociales de los años 90 e inicios del 2000. Durante todos estos conflictos, las mujeres tuvieron una participación fundamental en las organizaciones sociales, que ha sido poco reconocida en la conquista de los derechos de los pueblos originarios y la defensa de los recursos naturales y el territorio. La defensa de la hoja de coca fue uno de los momentos con gran participación social de las mujeres cocaleras organizadas en federaciones, que desafiaban las estructuras patriarcales en la búsqueda de reconocimiento y diálogo con las autoridades, incluida la primera dama, a quien le pidieron sensibilizar al gobierno.

Las mujeres de estas federaciones lucharon por los derechos de sus pueblos, pero también por los suyos propios, que incluyen la participación política en diversos escenarios. En el marco de los años 90, hubo avances significativos en los derechos de las mujeres. Se promulgaron leyes como la Ley 1674 contra la violencia doméstica en 1995 y la Ley de Cuotas de Género en 1997, que fueron abriendo camino en los avances de las luchas de las mujeres. No obstante, estas leyes no tuvieron efectos inmediatos debido a las limitaciones y acoso que las mujeres recibían por parte de los varones, así como por las intersecciones de opresión por género, clase y etnia.

Durante las crisis del agua y del gas, la participación de las mujeres indígenas fue igualmente significativa para el derrocamiento de los proyectos gubernamentales de privatización de estos recursos, aunque poco visibilizada en la memoria colectiva de este país. En estos acontecimientos sociales, las mujeres indígenas y campesinas no solo protestaron, sino que también apoyaron a los manifestantes con alimentos, contrarrestando la violencia, y ayudando a los heridos, entre otras actividades. Esto demuestra su resistencia y agencia en contextos de violencia y exclusión, pero también de solidaridad con las demandas del pueblo. El poco reconocimiento de las contribuciones en las luchas sociales de las mujeres implica la marginación de sus demandas, habida cuenta de que no se les considera como respuesta y solución para las crisis, pero también limita las posibilidades para participar activamente en la construcción de soluciones colectivas. Al no ser visibilizadas, se les niega la

oportunidad de contribuir con sus conocimientos, capacidades y experiencias para afrontar las crisis sociales y sus propias demandas. Desde esos espacios de poca visibilidad, se establecen barreras en la búsqueda plena de sus derechos. No obstante, lejos de tantos límites y la vulnerabilidad a la que estuvieron expuestas, las mujeres indígenas y campesinas hicieron un aporte fundamental a las manifestaciones sociales de los 90 y durante las guerras del agua y del gas. Los testimonios, relatos y noticias en varios periódicos de la época dan cuenta de eso.

### Bibliografía

- ALBAINE, L. (2009). *Cuotas de Género y Ciudadanía Política en Bolivia*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, Argentina.
- BROCKMANN QUIROGA, E. (2017). El acoso y la violencia política en Bolivia: lecciones aprendidas. En F. Freidenberg y G. del Valle Pérez (Eds.), *Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina* (pp. 263-284). Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
- CABEZAS FERNÁNDEZ, M. (2006). *¡A Chonchocoro! Testimonios de mujeres bolivianas afectadas por la "guerra del gas"*. Instituto Català de les Dones.

- CUEVAS VELÁSQUEZ, M. G. (2022). Breve revisión histórica del movimiento feminista en Bolivia. Universidad Católica Boliviana; Fundación Hanns Seidel. *Serie Ideas y Reflexiones* (1).
- FEDERICI, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Traficantes de sueños. [https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS\\_map49\\_federici\\_web\\_0.pdf](https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map49_federici_web_0.pdf)
- CRESPO FLORES, C. (2000). La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder. *Ecología política*, (20), 59-70.
- GARAY VERA, C. Y MENDOZA PINTO, J. E. (2015). El choque de dos imaginarios geopolíticos en Bolivia. La “Guerra del Gas”. *Si Somos Americanos*, 15(1), 115-139. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-09482015000100005>
- GARCÍA LINERA, A. (2009). Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia (2001). En *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia* (pp. 347-420). Siglo del Hombre Editores; CLACSO.
- KRUSE, T. (2005). La “Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. En E. de la Garza Toledo (Comp.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina* (pp. 121-161). CLACSO.
- LAGARDE, M. (1996). El género. En *Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia* (pp. 13-37). Horas y Horas.
- LEY 2494 DE 2003, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 4 de agosto de 2003. G.O. 2509. <http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/2494>

- LUGONES, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa*, (9), 73-101.
- LUX DE COTI, O. (2019). Historias bellas de mujeres construyendo liderazgo, justicia y paz. En C. Salas (Ed.), *Historias de mujeres de paz*. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"; Pawanka Fund; Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe. <https://www.filac.org/wp-content/uploads/2021/02/Armado-Libro-Mujeres-Paz-17-02-2020.pdf>
- MELUCCI, A. (1986). Las teorías de los movimientos sociales. *Estudios Políticos*, 5(2), 67-77. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.1986.2.60047>
- MORAS, R. (2007). *La Guerra del Gas en Bolivia: Más allá de la resistencia al neoliberalismo*. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- MORALES, J. (2009). La experiencia populista de los años ochenta. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, (12), 31-60. [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S207447062009000200003&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S207447062009000200003&lng=es&tlng=es).
- NESO, N. (2013). De la guerra del agua hasta la guerra del gas. Los movimientos sociales de Bolivia y la elección de Evo Morales. *Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, 8(15), 207-232.
- PADILLA POVEDA, N. (2014). ¡Jallalla Bartolina Sisa! Etnia y género en la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz-Bartolina Sisa, Bolivia, 1980-2010. *Revista Norte Histórico*, (2), 111-114.
- PEREDO BELTRÁN, E. (2003). Mujeres del Valle de Cochabamba: agua privatización y conflicto. Fundación Heirich Böll. *Global Issue Papers* (4).



- PINTO OCAMPO, M. T. (2004). *Entre la represión y la concertación: los cocaleros en el Chapare y en el Putumayo*. CLACSO.
- PINTO OCAMPO, M. T. (2008). De cómo lograr trascendencia política desde abajo: las movilizaciones cocaleras en Bolivia (1987-2001). *Análisis Político*, (64), 40-56.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (2010). *Violencias (re) encubiertas en Bolivia*. La mirada salvaje; Editorial Piedra Rota.
- SALAZAR ORTUÑO, F. B. (2011). *Movimientos sociales en torno al agua en Bolivia. Privatización e insurrección social en la guerra del agua en Cochabamba*. UMSS; ASDI.
- SÁNCHEZ ECHEVERRÍA, M. (2015). Ser “Bartolina” en tiempos de cambio. *Procesos de construcción identitaria de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” en el Estado Plurinacional*. CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/11058>
- SANTOS, B. DE S. (2007). *La reinención del Estado y el Estado Plurinacional*. Alianza Interinstitucional Centro de Comunicación y Desarrollo Andino; Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social; Centro de Documentación e Información Bolivia. [https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/reinencion%20del%20estado%20y%20estado%20plurinacional\\_Bolivia.pdf](https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/reinencion%20del%20estado%20y%20estado%20plurinacional_Bolivia.pdf)
- TANAKA, M. (2001). *Participación popular en políticas sociales. Cómo y cuándo es democrática y eficiente, y por qué puede también ser lo contrario*. Instituto de Estudios Peruanos; Consorcio de Investigación Económico y Social.
- TAPIA, L. (2013). La fuerza de octubre. En M. Zelaya Sánchez, A. Hinojosa, F. Barrientos y M. Montellano Gutiérrez (Eds.), *De regreso a octubre: La “guerra del gas” 10 años después*. Página Siete; Editorial El Cuervo.

- TAPIA, L. (2007) Bolivia: ciclos y estructuras de la rebelión. En M. Svampa y P. Stefanoni (Comps.), *Bolivia: Memoria, insurgencia y movimientos sociales* (pp. 171-188). CLACSO; Editorial El colectivo.
- UDAETA, M. E. (2006). La visión y participación de las Mujeres en la Guerra del Agua en Cochabamba Bolivia. En *Transversalización del enfoque de género en la gestión del agua* (pp. 174-181). Gender and Water Alliance; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- ZABALAGA, C. (2004). *La organización de las mujeres del chapare: el camino recorrido, sus luchas y liderazgos*. Coordinadora de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba.